

Cuestionario de dificultad media – Bloque 2

1. En relación con las acepciones del término "fuentes del Derecho", ¿qué identifica específicamente la denominada acepción material según la doctrina administrativa?

- a) Al modo de expresión o manifestación externa que asumen las normas jurídicas.
- b) A las fuerzas sociales que tienen la potestad de crear normas en el seno de la sociedad.
- c) A los medios de conocimiento a través de los cuales se accede al material normativo.
- d) A la jerarquía formal que ocupan las distintas disposiciones en el ordenamiento jurídico.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3 del Código Civil, ¿cuál de los siguientes requisitos es indispensable para que la costumbre se aplique como fuente del Derecho?

- a) Que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte debidamente probada.
- b) Que exista una laguna legal absoluta y haya sido ratificada por el Tribunal Supremo.
- c) Que haya sido publicada previamente en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.
- d) Que se fundamente en la aplicación analógica de una norma de rango reglamentario.

3. En relación con el valor jurídico del Preámbulo de la Constitución Española de 1978, señale la afirmación que mejor describe su naturaleza según la doctrina constitucional:

- a) Sus preceptos son de aplicación directa y prevalecen sobre el Título Preliminar de la norma.
- b) Posee un valor meramente literario sin ninguna transcendencia para la interpretación de las leyes.
- c) Carece por completo de valor normativo al no formar parte del articulado dispositivo del texto.
- d) Tiene un valor interpretativo de gran relevancia para determinar la finalidad de las normas constitucionales.

4. Los valores superiores del ordenamiento jurídico, enunciados en el artículo 1.1 de la Constitución, actúan principalmente como mandatos al legislador. Esto implica que:

- a) Son normas secundarias que solo se aplican en defecto de ley escrita o costumbre probada.
- b) Generan de forma automática una sanción administrativa en caso de ser ignorados por el ciudadano.
- c) Constituyen directrices esenciales que deben orientar la creación e interpretación de las leyes.
- d) Son preceptos de aplicación directa que pueden ser invocados aisladamente ante cualquier juzgado.

5. Conforme a lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 40/2015, sobre el planteamiento de la recusación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- a) La posibilidad de promover la recusación queda limitada exclusivamente al momento del inicio del procedimiento.
- b) La recusación podrá promoverse por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
- c) El planteamiento de la recusación debe realizarse mediante escrito expresando la causa en que se funde.
- d) Las causas de recusación son las mismas que las previstas legalmente para la abstención de autoridades.

6. Según el artículo 38.2 de la Ley 40/2015, el establecimiento de una sede electrónica conlleva una responsabilidad específica para su titular. ¿Sobre qué elementos recae dicha responsabilidad?

- a) Exclusivamente sobre la seguridad de las claves de acceso proporcionadas por los ciudadanos.
- b) Sobre la disponibilidad técnica de la página web exclusivamente durante los días hábiles.
- c) Sobre la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios disponibles en la misma.
- d) Queda eximido de toda responsabilidad si la gestión técnica ha sido subcontratada a una empresa externa.

7. El artículo 40.1 de la Ley 40/2015 regula la identificación de las Administraciones Públicas mediante sellos electrónicos. Respecto a su contenido, la norma establece que:

- a) Se prohíbe el uso del número de identificación fiscal del organismo en la configuración del sello.
- b) La identificación mediante sello electrónico solo es válida para actuaciones que supongan gastos.
- c) Los sellos electrónicos de órganos nunca pueden incluir la identidad de la persona física titular.
- d) Deben basarse en certificados electrónicos que cumplan los requisitos de la normativa de firma electrónica.

8. En el marco de la Ley 40/2015, se define la actuación administrativa automatizada como aquella que se caracteriza por:

- a) Ser realizada íntegramente por medios electrónicos sin que haya intervenido directamente un empleado público.
- b) Requerir la supervisión constante y en tiempo real de un funcionario para validar cada paso del sistema.
- c) Limitarse a tareas de archivo y custodia de documentos, sin capacidad para dictar actos de trámite.
- d) Ser utilizada únicamente en procedimientos selectivos para la corrección automática de ejercicios.

9. En relación con la interoperabilidad de los sistemas de firma electrónica prevista en el artículo 45.2 de la Ley 40/2015, señale la opción incorrecta:

- a) Se podrá superponer un sello electrónico sobre firmas electrónicas basadas en sistemas distintos.
- b) Las Administraciones pueden prohibir la superposición de sellos para garantizar la exclusividad de su software.
- c) El objetivo de la superposición es favorecer la interoperabilidad y el reconocimiento de los documentos.
- d) Los sistemas de firma deben permitir la verificación de la integridad y procedencia de los documentos.

10. Conforme al artículo 46.2 de la Ley 40/2015, ¿qué requisito deben cumplir los formatos de los documentos electrónicos que se conserven en el archivo electrónico único?

- a) Asegurar la identidad, integridad y autenticidad de la información necesaria para reproducir el documento.
- b) Deben ser elegidos libremente por el interesado, aunque dificulten la posterior reproducción de los datos.
- c) Es obligatorio que sean formatos de carácter propietario cuyo código fuente sea inaccesible para el ciudadano.
- d) Deben permitir la modificación parcial del contenido sin que sea necesario dejar constancia del autor.

11. Los medios o soportes en que se almacenen documentos electrónicos, según el artículo 46.3 de la Ley 40/2015, deben contar con medidas de seguridad que garanticen su protección. ¿Qué normativa es de aplicación obligatoria?

- a) Las recomendaciones técnicas internacionales ISO que la Universidad decida aplicar voluntariamente.
- b) Los protocolos de seguridad definidos discrecionalmente por el proveedor externo del servicio de nube.
- c) Las directrices internas de cada órgano administrativo, sin necesidad de seguir estándares estatales.
- d) Las medidas de seguridad previstas en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

12. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, ¿tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los menores de edad?

- a) Sí, pero únicamente cuando hayan cumplido los dieciséis años y se encuentren legalmente emancipados.
- b) No, ya que carecen de ella y requieren siempre y obligatoriamente la asistencia de sus representantes.
- c) Sí, para la defensa de sus intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento sin asistencia.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta conforme a lo establecido en la citada Ley.

13. Según el artículo 4.1.b) de la Ley 39/2015, ¿en qué condición se encuentran las personas que, sin haber iniciado el procedimiento, tienen derechos afectados por la decisión?

- a) Tienen la condición de interesados en el procedimiento de pleno derecho.
- b) Se consideran meros observadores sin capacidad para intervenir en el proceso.
- c) Solo adquieren la condición de interesados si el instructor les invita formalmente.
- d) Carecen de derechos en el procedimiento administrativo por no ser los promotores.

14. Conforme al artículo 4.1.c) de la Ley 39/2015, los titulares de intereses legítimos que no hayan iniciado el proceso pueden personarse como interesados:

- a) Únicamente durante el plazo de los diez primeros días desde la iniciación del expediente.
- b) En cualquier momento de la tramitación, siempre que no haya recaído resolución definitiva.
- c) Exclusivamente durante el trámite de información pública si este llegara a convocarse.
- d) Solo si demuestran que el promotor inicial del procedimiento les ha autorizado el acceso.

15. El artículo 9.2 de la Ley 39/2015 regula la identificación electrónica. ¿Cuál de los siguientes sistemas debe ser admitido obligatoriamente por las Administraciones?

- a) Exclusivamente el reconocimiento de firma electrónica mediante sistemas biométricos.
- b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico.
- c) Únicamente sistemas de identificación basados en el envío de mensajes SMS al móvil.
- d) Cualquier sistema privado de identificación que el interesado decida usar libremente.

16. Respecto al uso de firma en el procedimiento administrativo, el artículo 11.2 de la Ley 39/2015 establece que las Administraciones Públicas:

- a) Requerirán firma obligatoria para cualquier actuación, incluyendo la mera consulta de datos.
- b) Exigirán firma electrónica para la formulación de solicitudes y para desistir de acciones.
- c) Prohibirán el uso de firma electrónica cualificada para trámites que no impliquen pagos.
- d) Solo podrán exigir firma si el interesado ha optado por el uso de modelos normalizados.

17. De acuerdo con el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, ¿a qué interesados deben asistir las Administraciones en el uso de medios electrónicos (identificación y firma)?

- a) Exclusivamente a las personas jurídicas que carezcan de medios técnicos propios.
- b) A los interesados no obligados a la relación electrónica que así lo soliciten expresamente.
- c) Únicamente a aquellos ciudadanos que residan en municipios de menos de 100 habitantes.
- d) A todos los profesionales colegiados, independientemente de su capacidad económica.

18. En relación con los modelos y sistemas de presentación masiva previstos en el artículo 66.4 de la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta:

- a) Los elementos adicionales aportados por el solicitante para completar el modelo pueden ser rechazados.
- b) La Administración está obligada a admitir y tener en cuenta los datos adicionales que precise el interesado.
- c) El uso de estos modelos masivos es siempre obligatorio para cualquier tipo de solicitud inicial.
- d) Una vez adoptado el modelo, el interesado pierde el derecho a adjuntar documentos anexos.

19. Cuando la Administración establece modelos específicos de presentación de solicitudes para un procedimiento concreto, según el artículo 66.6 de la Ley 39/2015:

- a) Su uso será meramente recomendado, pudiendo el interesado usar un folio en blanco.
- b) El interesado deberá utilizarlos obligatoriamente para que su solicitud sea tramitada.
- c) Solo serán obligatorios para aquellos interesados que actúen a través de representante.
- d) Se permitirá el uso de modelos antiguos de otras Administraciones por el principio de confianza.

20. El artículo 68.2 de la Ley 39/2015 permite ampliar el plazo de subsanación de diez días. ¿Qué condición establece la norma para dicha ampliación?

- a) Que la ampliación no exceda de cinco días y no se aplique a procedimientos selectivos.
- b) Que se cuente con el consentimiento previo de todos los demás interesados personados.
- c) Que el interesado acredite ser un profesional que requiere colegiación obligatoria.
- d) No existe límite de días, siempre que la resolución final no sea de carácter sancionador.

21. Según lo dispuesto en el artículo 69.3 de la Ley 39/2015, ¿desde qué momento permite una declaración responsable el inicio de la actividad?

- a) Desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación posteriores.
- b) Transcurridos quince días hábiles desde su registro para que la Administración la valide.
- c) A partir de la recepción de una comunicación expresa de "conforme" dictada por el instructor.
- d) Solo a partir del ejercicio presupuestario siguiente al de la fecha de presentación del documento.

22. Conforme al artículo 69.4 de la Ley 39/2015, ¿qué consecuencia tiene la inexactitud o falsedad de carácter esencial en una declaración responsable?

- a) La imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde que se tenga constancia.
- b) El pago de una tasa adicional de validación, tras la cual se podrá continuar la actividad.
- c) La obligación de suspender la actividad únicamente durante los periodos de vacaciones escolares.
- d) Ninguna, siempre que el interesado presente un nuevo documento correcto en tres días.

23. En el marco de la instrucción de un procedimiento, ¿en qué momento pueden los interesados aducir alegaciones según el artículo 76.1 de la Ley 39/2015?

- a) Exclusivamente durante los diez primeros días tras la notificación del acuerdo de inicio.
- b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- c) Únicamente después de que se haya dictado la propuesta de resolución definitiva.
- d) Solo si el órgano instructor abre un periodo específico de pruebas de carácter documental.

24. Respecto a los criterios de valoración de la prueba en el procedimiento administrativo común, el artículo 77.1 de la Ley 39/2015 remite expresamente a:

- a) Las normas de valoración contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- b) Los criterios discrecionales que el instructor considere oportunos en cada caso.
- c) Las directrices técnicas que dicte anualmente el Consejo de Estado para cada materia.
- d) La normativa específica de cada Comunidad Autónoma en materia de juicios de valor.

25. Conforme al artículo 77.3 de la Ley 39/2015, ¿en qué condiciones puede el instructor del procedimiento rechazar las pruebas propuestas por los interesados?

- a) Cuando considere que no aportan valor estético al expediente administrativo.
- b) Únicamente mediante resolución motivada si son manifiestamente improcedentes o innecesarias.
- c) De forma discrecional y verbal, siempre que el procedimiento sea de tramitación urgente.
- d) Solo si los gastos de la prueba superan el presupuesto anual del órgano instructor.

26. Según el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, los documentos formalizados por funcionarios con condición de autoridad que recojan hechos constatados por ellos:

- a) Tienen un valor meramente orientativo y deben ser ratificados por un notario.
- b) Carecen de validez probatoria si no van acompañados de un informe pericial externo.
- c) Hacen prueba de dichos hechos, salvo que se acredite lo contrario.
- d) Solo son válidos si el interesado manifiesta su conformidad expresa con su contenido.

27. Cuando la valoración de las pruebas sea pieza imprescindible para la decisión, el artículo 77.7 de la Ley 39/2015 exige que dicha valoración se incluya en:

- a) El acta de inicio del periodo de pruebas técnicas.
- b) La propuesta de resolución que formule el órgano instructor.
- c) El diario oficial correspondiente para general conocimiento de los ciudadanos.
- d) Una adenda reservada que no podrá ser consultada por los interesados.

28. Respecto a la práctica de la prueba, ¿qué obligación impone el artículo 78.1 de la Ley 39/2015 a la Administración actuante?

- a) Comunicar a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias.
- b) Realizar todas las pruebas de forma secreta para evitar la manipulación de resultados.
- c) Exigir siempre el pago previo de las tasas de laboratorio antes de admitir la prueba.
- d) Publicar en la sede electrónica la identidad de los técnicos que asistirán al interesado.

29. De acuerdo con el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, ¿qué consecuencia tiene la falta de emisión de un informe calificado como preceptivo en el plazo señalado?

- a) Se produce la nulidad automática de todas las actuaciones realizadas hasta ese momento.
- b) Se deberán proseguir las actuaciones sin posibilidad de suspender el procedimiento.
- c) Se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.
- d) El instructor será sancionado con la pérdida definitiva de su condición de funcionario.

30. Según el artículo 2.1 de la Ley 9/2017 (LCSP), ¿cuándo se entiende que un contrato del sector público tiene carácter oneroso?

- a) Únicamente cuando existe una transferencia directa de fondos desde la Administración.
- b) Cuando el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, directo o indirecto.
- c) Solo si el valor estimado del contrato es superior a los umbrales de regulación armonizada.
- d) Siempre que el contrato sea de obras, quedando excluidos los contratos de servicios.

31. Conforme a la definición legal de "obra" del artículo 13.2 de la LCSP, ¿cuál es el objeto necesario de los trabajos para que tengan tal consideración?

- a) Cualquier bien mueble que sea propiedad de una entidad del sector público.
- b) Un conjunto de servicios intelectuales dirigidos al diseño de programas informáticos.
- c) Un bien inmueble, destinado a cumplir una función económica o técnica.
- d) Exclusivamente el mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada de la Generalitat.

32. En relación con los contratos de obras completas y el fraccionamiento (Art. 13.3 LCSP), ¿qué requisito es indispensable para contratar proyectos independientes?

- a) Que el valor de cada proyecto sea inferior al 10% del presupuesto total de la entidad.
- b) Que los proyectos sean susceptibles de utilización independiente o tengan unidad funcional.
- c) Que el órgano de contratación cuente con la autorización previa del Ministerio Fiscal.
- d) No existe restricción, la Administración puede fraccionar contratos para evitar la publicidad.

33. El artículo 16.3.a) de la LCSP califica como contrato de suministro a aquel en el que el empresario se obliga a:

- a) Prestar asesoramiento jurídico continuo a los altos cargos de la Administración.
- b) Entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario.
- c) Ejecutar una obra completa de ingeniería civil en un plazo superior a dos años.
- d) Organizar eventos y espectáculos culturales en instalaciones de la Universidad.

34. De acuerdo con el procedimiento de subasta electrónica (Art. 143.7 LCSP), ¿cuál es el plazo mínimo entre el envío de invitaciones y el comienzo de la subasta?

- a) Doce horas naturales para garantizar la rapidez en la adjudicación del contrato.
- b) Dos días hábiles, plazo que no puede ser reducido por el órgano de contratación.
- c) Diez días naturales, prorrogables por otros cinco si lo solicita un licitador.
- d) El plazo que determine discrecionalmente la mesa de contratación en cada sesión.

35. Según el artículo 146.2.a) de la LCSP, cuando se utilicen criterios cuya valoración dependa de juicios de valor, el comité de expertos:

- a) Debe estar compuesto íntegramente por personal eventual de confianza del Rector.
- b) No podrá estar formado por personas adscritas al órgano proponente del contrato.
- c) Estará presidido obligatoriamente por el representante de la Sindicatura de Comptes.
- d) Solo intervendrá si el presupuesto del contrato es superior a un millón de euros.

36. El artículo 153.3 de la LCSP establece que, con carácter general, la formalización del contrato deberá efectuarse:

- a) Al día siguiente de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.
- b) Antes de que transcurran cinco días naturales desde la aprobación del gasto.
- c) No más tarde de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación.
- d) En el plazo de un mes, siempre que el adjudicatario sea una pequeña o mediana empresa.

HOJA DE SOLUCIONES Y JUSTIFICACIONES

Nº	Solución	Justificación Técnica
1	B	La acepción material se refiere a las fuerzas sociales creadoras (pueblo, Estado, organizaciones), mientras que la formal alude al modo de expresión. Fuente: Tema 7, Pág. 1.
2	A	El Art. 1.3 del Código Civil establece que la costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral/orden público y que resulte probada.
3	D	Aunque no tiene fuerza vinculante directa como el articulado, el Preámbulo posee un alto valor interpretativo de la voluntad del constituyente. Fuente: Tema 7, Pág. 5.
4	C	Los valores superiores no son fuentes de aplicación directa por sí solos, sino directrices que informan todo el ordenamiento. Fuente: Tema 7, Pág. 4.
5	A	El artículo 24.1 de la Ley 40/2015 establece explícitamente que la recusación puede promoverse "en cualquier momento de la tramitación del procedimiento".
6	C	El literal del artículo 38.2 de la Ley 40/2015 vincula al titular con la responsabilidad de integridad, veracidad y actualización de la información y servicios.
7	D	Según el Art. 40.1, las administraciones podrán identificarse mediante sello basado en certificado electrónico que reúna los requisitos de la normativa de firma.
8	A	El artículo 41.1 de la Ley 40/2015 define esta actuación como la realizada íntegramente por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público.
9	B	El artículo 45.2 fomenta la superposición de sello precisamente para garantizar la interoperabilidad, no permitiendo su prohibición arbitraria por exclusividad de software.
10	A	El artículo 46.2 exige que los formatos aseguren la identidad, integridad y autenticidad de la información necesaria para su reproducción.
11	D	El artículo 46.3 de la Ley 40/2015 impone explícitamente la aplicación de las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad.

12	C	El artículo 3.b) de la Ley 39/2015 reconoce capacidad a los menores para defender derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento sin asistencia.
13	A	El artículo 4.1.b) de la LPACAP establece que son interesados quienes, sin haber iniciado el proceso, tengan derechos afectados. Fuente: Tema 9, Pág. 3.
14	B	Según el artículo 4.1.c), la personación es válida en tanto no haya recaído resolución definitiva. Fuente: Tema 9, Pág. 3.
15	B	El artículo 9.2.b) incluye específicamente los certificados de sello electrónico como medio válido de identificación. Fuente: Tema 9, Pág. 6.
16	B	El artículo 11.2 detalla los casos de uso obligatorio de firma: solicitudes, declaraciones, recursos, desistimiento y renuncia. Fuente: Tema 9, Pág. 8.
17	B	El artículo 12.2 impone la obligación de asistencia a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del art. 14 (no obligados). Fuente: Tema 9, Pág. 8.
18	B	El artículo 66.4 establece que los datos para precisar el modelo "deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano". Fuente: Tema 9, Pág. 21.
19	B	El artículo 66.6 indica claramente que, si se establecen modelos específicos, "éstos serán de uso obligatorio". Fuente: Tema 9, Pág. 21.
20	A	El artículo 68.2 permite ampliar el plazo hasta cinco días, excepto en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Fuente: Tema 9, Art. 68.
21	A	El artículo 69.3 establece que permiten el inicio de la actividad "desde el día de su presentación". Fuente: Tema 9, Pág. 23.
22	A	El artículo 69.4 determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad tras detectarse la falsedad. Fuente: Tema 9, Pág. 23.
23	B	El artículo 76.1 permite presentar alegaciones "en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia". Fuente: Tema 9, Pág. 25.
24	A	El artículo 77.1 establece que la valoración de las pruebas se realizará conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Fuente: Tema 9, Art. 77.

25	B	El artículo 77.3 establece que el rechazo debe ser mediante resolución motivada y basado en que sean improcedentes o innecesarias.
26	C	La Ley otorga valor probatorio a los hechos constatados personalmente por autoridades, admitiendo prueba en contrario (Art. 77.5).
27	B	El literal del artículo 77.7 obliga a incluir la valoración de pruebas clave en el texto de la propuesta de resolución.
28	A	La norma exige la comunicación previa a los interesados para garantizar su derecho de asistencia y participación (Art. 78.1).
29	C	El artículo 80.3 permite suspender el plazo para resolver cuando se espera un informe preceptivo que no ha sido emitido.
30	B	El carácter oneroso se define por la obtención de beneficio económico por parte del contratista (Art. 2.1 LCSP).
31	C	La Ley vincula el concepto de obra al resultado de trabajos sobre un bien inmueble con función técnica o económica (Art. 13.2).
32	B	El artículo 13.3 prohíbe el fraccionamiento si las partes no son susceptibles de explotación o uso independiente.
33	B	La entrega sucesiva de bienes por precio unitario es una característica propia del contrato de suministro según la LCSP (Art. 16.3).
34	B	El artículo 143.7 establece un plazo mínimo de dos días hábiles para permitir la preparación de los licitadores.
35	B	Para garantizar la imparcialidad, los expertos no deben pertenecer al órgano que propone la contratación (Art. 146.2.a).
36	C	El plazo general máximo para la formalización tras la notificación de adjudicación es de quince días hábiles (Art. 153.3).